

ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO
DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA
EN LA LEY DE “JUSTICIA Y PAZ”

Ana Lucía Moncayo Albornoz¹

Resumen

[Palabras clave: Acceso a la justicia, Víctimas de derechos humanos, Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz, Garantía a un recurso judicial efectivo]

Este artículo analiza el derecho de acceso a la justicia en las víctimas de violaciones a derechos humanos en el marco del conflicto armado interno colombiano, a propósito de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de “Justicia y Paz”. Indaga el contenido de este derecho en la doctrina, normatividad nacional e internacional y jurisprudencia nacional e internacional, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

1 Abogada de la Universidad Externado de Colombia, especializada en Derecho Penal de la misma universidad, con maestría en ciencias penales de la Universidad de Barcelona y Pompeu Fabra (Barcelona - España). Investigadora y coordinadora de la línea de investigación de victimología del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia, desde 2003, e investigadora de la Cátedra UNESCO “Derechos Humanos y violencia: gobierno y gobernanza”.

Del mismo modo, analiza la garantía del Estado de acceso a un recurso judicial efectivo y su deber de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables. Deber que se acentúa ante violaciones de derechos humanos en un escenario de desmovilización. Las víctimas de estas violaciones en su mayoría pertenecen a zonas rurales, con escasos recursos, bajo nivel educativo, etc. En la aplicación de la Ley 975 de 2005 se observaron obstáculos de distinto orden que hacen nugatorio el derecho de acceso a la justicia que les asiste y, por supuesto, no permite que las víctimas sean reparadas en sus derechos.

El incumplimiento del Estado en su obligación de garantizar el acceso a un recurso judicial efectivo se hace manifiesto en esta Ley.

La identificación de estos obstáculos resulta interesante en la construcción de una política pública de acceso a la justicia, especialmente para aquellas personas que, por la gravedad de las victimizaciones, han sufrido más dolor.

El principio de acceso a la justicia tiene su sustento en la facultad que tienen todas las personas a hacer valer sus propios derechos ante un órgano jurisdiccional². Dicho en otras palabras, es el derecho que tiene toda persona a refutar con argumentos fácticos, probatorios y jurídicos ante una instancia judicial sus derechos vulnerados, para obtener de manera eficaz reconocimiento, protección y reparación de los mismos.

Derecho que ha sido reconocido por numerosos instrumentos internacionales, algunos de carácter vinculante para los Estados y otros, aunque no vinculantes, sí relevantes por responder a un consenso internacional de protección de los

2 Art. XVIII. De la Declaración Americana de los Derechos y deberes del "Hombre". Artículo XVIII. "Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos....". En el mismo, sentido, Cfr. CUERVO (2005: 7).

derechos humanos. Entre ellos, encontramos la Declaración Universal de Derechos Humanos³ –Art.8–; La Declaración Americana de los Derechos y deberes del “Hombre” –Art. XVIII⁴–; la Convención Americana de Derechos Humanos en los artículos 8 –garantías judiciales– y 25 –Protección judicial⁵–; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 26 –igualdad ante la ley– y 14 –garantías judiciales–; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional –artículos 19.3, 65.4, 68, 75 y 82.4⁶–; la Convención Europea de Derechos Humanos –artículo 6–⁷.

- 3 La Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 8: *“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la Ley”*.
- 4 La Declaración Americana de los Derechos y deberes del “Hombre” –artículo XVIII–: *“Derecho de justicia. Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, algunos de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.*
- 5 “Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (...) Artículo 25. *“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.*
2. Los Estado partes se comprometen:
 - a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
 - b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
 - c) a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
- 6 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional. A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998, artículos 19.3, 65.4, 68, 75 y 82.4.
- 7 Convención Europea, artículo 6: *“Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial”*.

Otros instrumentos buscan la protección y restitución del derecho de acceso a la justicia tanto en víctimas de delitos de violaciones de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, como en víctimas de abuso del poder. Entre ellos encontramos:

– Los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, los cuales, en Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985⁸, señalaron que las víctimas de delitos “tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido”. Asimismo, consagró que se les facilitará la adecuación de los procesos judiciales y se les permitirá asistencia apropiada durante todo el proceso

-
- 8 Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder. *Acceso a la justicia y trato justo* 4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. 5. Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos. 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. 7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas.

judicial, así como también la presentación de sus preocupaciones y opiniones en etapas apropiadas, siempre que estén en juego sus intereses.

– Los Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha contra la Impunidad (2005)⁹, señalan –en el principio 19– que los Estados deberán emprender investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e imparciales frente a las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y la iniciativa de enjuiciamiento debe provenir del Estado. Así mismo, señala que los Estados deben garantizar la amplia participación jurídica en el proceso judicial a todas las partes perjudicadas y a toda persona u organización no gubernamental que tenga un interés legítimo en el proceso.

Y se encuentra de manera expresa en los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y ha obtener reparaciones”¹⁰, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicho instrumento señala que la víctima de una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o de una violación grave del derecho humanitario debe tener acceso igual a un recurso judicial efectivo, conforme a lo previsto en el derecho internacional. También debe tener acceso a órganos administrativos y de otra índole, así como a mecanismos, modalidades y procedimientos utilizados conforme al derecho interno (numeral 12).

9 Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha contra la Impunidad. 2005

10 Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005.

La importancia de este reconocimiento por parte de la comunidad internacional ha sido trascendental para que el acceso a la justicia sea incorporado como derecho fundamental (BIRGIN y KOHEN, 2006: 15)¹¹ en las constituciones de los diferentes Estados, específicamente en aquellos democráticos de derecho. En éstos, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la igualdad¹² están entrañablemente vinculados, en el entendido que se garantiza a todas las personas, sin discriminación alguna, el derecho de acceder a la justicia. El Estado es entonces un instrumento que permite dicha materialización, en tanto permite que la sociedad de manera igualitaria acuda ante él para que resuelva sus conflictos, reconozca sus derechos y tome las medidas necesarias para protegerlos; de lo contrario, la justicia por propia mano sería la imperante. Así, entonces, será el Estado el que regule este derecho ante la sociedad, la cual dentro del sistema debe reconocer y legitimar la función de éste.

Para lograr la efectividad de este principio se requiere, a su vez, que quien lo alega o refuta sea oído por el órgano jurisdiccional competente, con las debidas garantías¹³ reconocidas a través de los distintos instrumentos internacionales como nacionales. Es decir, una persona accederá a la justicia siempre que sea escuchada; lo contrario sería, en palabras de FRANCISCO FERNÁNDEZ SEGADO¹⁴, someter a la persona a un estado de indefensión, esta vez por parte del Estado, quien en últimas detenta el poder jurisdiccional.

11 En el mismo sentido, MARABOTTO, JORGE (2007).

12 Entre otros, Cfr. CUERVO (Op cit.: 3). En el mismo sentido, BIRGIN y KOHEN (Op cit.: 15).

13 Artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Artículo 6.º de la Convención Europea de Derechos Humanos. Sobre el derecho a ser oído. la Convención Europea de Derechos Humanos –artículo 6.º– “*Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial*”. (Cfr. ACOSTA, 2007: 116).

14 Cfr. FERNÁNDEZ (1999). Así mismo, Corte Interamericana de Derechos Humanos caso VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Excepciones preliminares, sentencia de junio 26 de 1987.

La doctrina¹⁵ y la jurisprudencia¹⁶ han reconocido que para que se dé cumplimiento al derecho de acceso a la justicia no es suficiente con accionar el sistema jurisdiccional, sino que se requiere del cumplimiento de varios derechos que conforman su contenido, así: (i) *derecho de acceso a un órgano jurisdiccional*. Entendido como el derecho que toda persona tiene a accionar el sistema judicial, a hacer parte de un proceso equitativo con las garantías de un tribunal independiente, imparcial y competente. Es decir, acceder al sistema judicial sin discriminación alguna; (ii) *el derecho a participar*¹⁷ *en el proceso y a que las pretensiones solicitadas se desarrollen de conformidad con las normas del debido proceso*. No se trata solamente de accionar el sistema sino también de dinamizarlo a través de la participación real de quien entró, dando cumplimiento a las mínimas garantías propias de un proceso judicial. Estos dos literales, según GARCÍA RAMÍREZ, hacen parte de lo que se conoce como acceso formal de la justicia; (iii) *Derecho a obtener un fallo, pronto firme y ejecutable*. Dicho en otras palabras, es el contenido material¹⁸ del derecho al acceso a la justicia; “Sin esto último, aquello resulta estéril: simple apariencia de justicia, instrumento

15 Cfr. GARCÍA RAMÍREZ (s.f.) y FERNÁNDEZ SEGADO (1999).

16 Voto Concurrente razonado del Juez SERGIO GARCÍA RAMÍREZ (Vicepresidente). Corte IDH, caso Myrna Mack Chang Vs Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2003. Párrafo 5; Voto disidente del Juez ANTONIO CANCADO TRINDADE, párrafo 2, Caso: Cinco pensionistas Vs Perú. Y Corte Constitucional Sentencias C-228 de 02, Sentencia 454 de 2005 y Sentencia C-209 de 2007

17 *La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho al acceso a la justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga justicia. Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso penal y el derecho a participar en el proceso penal, por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser eminentemente participativo*. Corte Constitucional, Sentencia C-209 de 2007 (subrayado fuera del texto).

18 Acceso formal y material a la justicia “Formal, como derecho de plantear contiendas, probar los hechos y las razones y alegar en defensa de las correspondientes pretensiones; material, como derecho a obtener una sentencia favorable a las pretensiones justas” (GARCÍA RAMÍREZ, 1997: 22 - 23 y GARCÍA RAMÍREZ, 2004).

ineficaz que no produce el fin para el que fue concebido”¹⁹. Una respuesta pronta sin dilaciones injustificadas se hace necesaria para concretar el derecho de acceso a la justicia, pues de lo contrario, como lo señala FIX-ZAMUDIO²⁰, “una justicia retrasada es una justicia denegada”.

Además se requiere que la sentencia sea ejecutable; así, la CIDH señaló en el caso CABREJO BERNUY: “El artículo 25 de la Convención hace alusión directa al criterio de efectividad del recurso judicial, el cual no se agota con la sentencia de fondo sino con el cumplimiento de dicha decisión. (...) El Estado debe, por todos los medios posibles, no sólo brindar a los ciudadanos la rama jurisdiccional para que sean atendidas todas las pretensiones que deseen hacer valer ante los jueces, sino también garantizarles de alguna forma que los efectos de la sentencia se cumplirán, pues de lo contrario estaríamos ante una clara ineffectividad del derecho a la tutela jurisdiccional”²¹.

Es por ello que la ejecutabilidad de la sentencia resulta ser la concreción del derecho de acceso a la justicia. Es la consumación de un camino, en la mayoría de los casos, largo, puntilloso y desgastante, pero fundamental en la búsqueda del reconocimiento, protección y reparación de derechos.

Es importante señalar que en todo el contenido del derecho de acceso a la justicia deben estar presentes las garantías propias del debido proceso, por tratarse de un derecho fundamental en todos los procedimientos.

19 Voto Concurrente razonado del Juez SERGIO GARCÍA RAMÍREZ (Vicepresidente). Corte IDH, caso MYRNA MACK CHANG Vs Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2003. Párrafo 5. En el mismo sentido, SERGIO GARCÍA RAMÍREZ (2004).

20 Citado en GARCÍA RAMÍREZ (2004: 109).

21 CIDH caso CABREJOS BERNUY, párr. 29. Informe n.º 110 (12-4-2000).

LA VÍCTIMA Y EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

Ahora bien, como lo han reconocido la doctrina²² y la Corte Constitucional²³, el principio de acceso a la justicia es una garantía no sólo del imputado sino de la víctima. Es un derecho que ambas partes tienen dentro del proceso jurisdiccional. Es una garantía bilateral, tradicionalmente reconocida al implicado desde el proceso penal –clásico–, en el que el Estado, en ejercicio de su poder punitivo que se traduce en la restricción de derechos, se centró en el procesado, quien, en la dinámica propia de su proceso, tiene que lidiar tanto con las partes como con el mismo Estado, por lo que la comunidad internacional apuntó a la protección de sus derechos.

En consecuencia, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional le reconocieron al imputado el derecho de acceso a la justicia, el cual ha sido dinamizado no solo con el derecho de defensa sino con las garantías propias de un debido proceso. Pero no sucedió lo mismo con la víctima, quien solo a partir de los años sesenta, como consecuencia de la protección a las víctimas de la II Guerra Mundial, fue sujeto de atención por parte del Estado, que empezó a interesarse por sus pretensiones y le dio un lugar dentro del proceso penal, no obstante, nunca tan definido como el que tiene el procesado. Es por ello que diferentes instrumentos internacionales²⁴ le han reconocido a la persona que es lesio-

22 Sobre el particular, ver CAFFERATA NORES.

23 Corte Constitucional, Sentencia C -209. M. P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA. En el mismo sentido: Sentencia 454 de 2006, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO y Sentencia SU 1184 de 2001. M. P. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, entre otras.

24 Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder; Los Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha contra la Impunidad (2005) principio 19; Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario a

nada en sus derechos fundamentales *el derecho* de acceder a la justicia, y al Estado el *deber* de garantizarlo, cumpliendo a su vez con la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables (CARO CORIA: 1.041).

Uno de los instrumentos más relevantes en este sentido es la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder; en ella se les reconoce el derecho de “*acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido*”²⁵. Así mismo, dicha declaración consagra que las víctimas deberán ser “*tratadas con compasión y respeto por su dignidad*”, al tiempo que consagra que “*se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas*”; para ello, entre otras actuaciones²⁶, se les permitirá asistencia apropiada durante

interponer recursos y a obtener reparaciones; La Convención de los Derechos del Niño, artículo 39, entre otros.

- 25 En esta Declaración se reconocen los derechos de personas víctimas de delitos al señalar textualmente que se entenderá por víctimas a “las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal”, así como a sus familiares y a las “víctimas de abuso del poder”.
- 26 Numeral 6.º de la Declaración. “a. Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;
b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;
c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;
d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;
e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas”.

todo el proceso judicial, así como también que sus preocupaciones y opiniones sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas siempre que estén en juego sus intereses. Disposiciones sobre indemnización y asistencia a las víctimas de delitos también se encuentran presentes.

Del mismo modo, el derecho de acceso a la justicia se encuentra de manera expresa en los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y a obtener reparaciones”²⁷, al señalar que la víctima de una violación manifiesta a esta normatividad debe tener acceso igual a un recurso judicial efectivo, conforme a lo previsto en el derecho internacional. También debe tener acceso a órganos administrativos y de otra índole, así como a mecanismos, modalidades y procedimientos utilizados conforme al derecho interno (numeral 12).

El derecho de acceso a la justicia resulta ser fundamental para la reparación integral de las víctimas, ya que a través de éste, las víctimas de conductas delictivas, especialmente de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, pueden hacer valer sus derechos y buscar reconocimiento, protección y reparación.

EL ACCESO A LA JUSTICIA: UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LA VÍCTIMA Y UN DEBER DEL ESTADO

El acceso a la justicia en un Estado democrático y social de derecho es un *derecho fundamental* para sus ciudadanos y ciudadanas (MARABOTTO, ob., cit.)²⁸, y como tal es de rango

27 Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005.

28 En el mismo sentido, BIRGIN y KOHEN, Op cit.: 15).

constitucional. En Colombia está consagrado en el artículo 229 de la CN, así: “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia...”. El contenido de este derecho, como se analizó previamente, contempla la posibilidad de que quien haya sido lesionado en sus derechos por particulares o por el mismo Estado pueda defenderse y ser escuchado ante el órgano competente, participar en el proceso y obtener una respuesta pronta sobre su específica pretensión.

La infracción a este derecho, a su vez, afecta otros derechos, los que en primera instancia fueron vulnerados y por los que la persona desea protección, y de ahí la importancia del mismo. De no hacerse efectivo el acceso a la justicia, inequívocamente surgirá la revictimización para la persona que lo activó, esta vez por parte del Estado que tiene el deber de lograr su efectividad. Aquí resulta pertinente lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al señalar que “las deficiencias del sistema judicial y de la administración de justicia reducen la posibilidad del individuo de tener acceso en todas las esferas de la vida”²⁹.

Y es que en los Estados que se proclaman democráticos las violaciones a sus derechos fundamentales deben ser justiciables, es decir “accionables en juicio” (FERRAGIOLI, s.f.: 917), al igual que los responsables de las mismas. Derecho que debe ser provisto por el Estado como una herramienta correctiva de las fallas que el mismo ha propiciado en detrimento de los derechos de sus asociados y asociadas y que es norma constitucional, como el derecho a la igualdad, el cual “permite que cualquier individuo se coloque en una posición determinada en la sociedad y que desde ella pueda

29 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derecho al recurso judicial y la administración de justicia en el Ecuador. Disponible en: <http://www.cidh.org/countryrep/Ecuador-sp/Capitulo%203.htm>

ejercer conductas sin discriminación frente a los demás asociados que se ubiquen en la misma posición” (VELÁSQUEZ TURBAY, 2004: 316). No obstante, la igualdad que propugna un Estado social y democrático ha sido ampliamente criticada, puesto que las trabas de la “igualdad de todos ante la ley”³⁰ “están dadas, entre otras, por las capacidades económicas y sociales de los individuos” (CAPPELLETI: 801), tal como lo veremos en el desarrollo de este estudio.

El Estado tiene el *deber* de efectividad del derecho de acceso a la justicia frente a aquellas personas que desean hacer valer sus derechos en busca de protección jurídica por la vulneración de los mismos. En virtud de esta obligación, el Estado tiene los deberes de abstenerse de realizar cualquier conducta que impida el cumplimiento del contenido del derecho de acceso a la justicia y actuar positivamente para el acatamiento del mismo.

Así, entonces, el Estado debe garantizar el principio de “efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos”³¹, –artículo 25.1 de la Convención IDH–; de no hacerlo en la práctica, es decir, de no adoptar o emplear en la realidad los instrumentos y medios constitucionales y legales imperantes, el Estado transgrede la Convención, así tales herramientas se encuentren normativamente reguladas³².

30 Consagrada en el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia “*se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia*” (Resaltado fuera de texto).

31 Corte IDH caso Colombia vs José ALEXIS FUENTES GUERRERO y otros. Informe n.º 61/99, Inter-Am. CHR, párrafo 44. En el mismo sentido, Corte Interamericana de Derechos Humanos caso: Trabajadores Cesados del Congreso (AGUADO ALFARO y Otros) vs Perú. Parráfo.125.Sentencia del 24 de noviembre de 2006, entre otras.

32 Corte Interamericana de Derechos Humanos caso: VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ, sentencia de julio 29 de 1988. Párrafo 166-167.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de Octubre de 1987, señaló: “la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la

Sobre la responsabilidad del Estado en la efectividad de este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a [sic] los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar”³³. Y sobre la presencia del recurso efectivo en las violaciones de derechos humanos, señaló que “para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. *No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios*” (resaltado fuera del texto)³⁴.

La misma Corte señaló que “los recursos son ilusorios cuando se demuestra su inutilidad en la práctica, el Poder Judicial carece de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o faltan los medios para ejecutar las decisiones que se dictan en ellos. A esto puede agregarse la denegación de justicia, el retardo injustificado en la decisión y el impedimento del acceso del presunto lesionado al recurso judicial”³⁵ (resaltado fuera del texto).

El condicionar el acceso a la justicia para evitar una sobrecarga de casos sin mérito³⁶ en el sistema y más espe-

Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla”.

33 Corte Interamericana, Opinión Consultiva OC-9/87, párr. 23.

34 Ídem.

35 Corte Interamericana, caso IVCHER BRONSTEIN. Sentencia del 6 de febrero de 2001, párr. 137.

36 CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos de los solicitantes

cíficamente en los tribunales, ha sido una pretensión legítima; así lo señaló La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el mismo organismo consagró que tales condicionamientos deben cumplir ciertos parámetros para no hacer nugatorio el derecho de acceso a la justicia, así: “no pueden ser irracionales, ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia”³⁷, ni discriminatorios³⁸.

Tal como se mencionó, los recursos judiciales deben existir formal y materialmente, pero además deben ser idóneos para que sean efectivos en la protección del derecho conculcado. La Corte Interamericana señaló, respecto de dichos recursos, que deben ser adecuados, esto es, “que la función de esos recursos del sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas circunstancias”³⁹.

En procura de la efectividad del derecho de acceso a la justicia el Estado tiene el deber de investigar lo sucedido, sancionar a los responsables y reparar a la víctima.

EL DEBER DEL ESTADO DE INVESTIGAR ENJUICIAR Y SANCIONAR EN VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Esta obligación, reconocida por el derecho internacional e instrumentos internacionales⁴⁰ como garantía de reco-

de asilo en el marco del sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado, párr. 101.

37 Ídem: párr. 99.

38 Ídem.

39 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ. Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 64.

40 Entre otros: la Convención Americana sobre Derechos (artículo 1, 1); la Convención Interamericana Sobre la Desaparición Forzada de Personas (artículo 1); la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (artículo 1); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2) y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes, Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las

nocimiento y protección de los derechos humanos, ha sido explícita en la Observación 20 al artículo 7⁴¹ del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ésta, el Comité de Derechos Humanos manifestó expresamente:

El artículo 7.º debe interpretarse conjuntamente con el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto. (...) El derecho a *presentar denuncias* contra los malos tratos prohibidos por el artículo 7 deberá ser reconocido en derecho interno. *Las denuncias deberán ser investigadas con celeridad e imparcialidad por las autoridades competentes a fin de que el recurso sea eficaz.* Los informes de los Estados Partes deberán proporcionar información concreta sobre los recursos de que disponen las víctimas de malos tratos y sobre los procedimientos que deban seguir los demandantes, así como datos estadísticos sobre el número de denuncias y el curso que se ha dado a las mismas.

El Comité ha observado que algunos Estados han concedido amnistía respecto de actos de tortura. *Las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los Estados de investigar tales actos,* de garantizar que no se cometan tales actos dentro de su jurisdicción y de velar por que no se realicen tales actos en el futuro. Los Estados no pueden privar a los particulares del derecho a una reparación efectiva, incluida la indemnización y la rehabilitación más completa posible (resaltado fuera del texto).

Este deber del Estado es determinante cuando se trata de violaciones a derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Sobre este particular, la Corte Interamericana

Desapariciones Forzadas y los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, entre otros. Obligación explícita en el Comité de Derechos Humanos. Observación 20 al artículo 7.º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Párr 14 y 15. Primordialmente una obligación del derecho consuetudinario.

- 41 Art. 7.º. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

señaló: “Este Tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho que asiste a los familiares de las víctimas de conocer lo sucedido y saber quiénes fueron los agentes del Estado responsables de los respectivos hechos.” [L]a investigación de los hechos y la sanción de las personas responsables, [...] es una *obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad*”. Además, ese Tribunal ha indicado que el Estado “tiene la obligación de combatir [la impunidad] por todos los medios legales disponibles ya que [ésta] propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas de sus familiares”⁴² (resaltado fuera del texto).

Según lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el deber del Estado de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables es una obligación de medio que debe ser realizada con rigor, más cuando se está en presencia de graves violaciones a los derechos humanos. Así lo señaló: “En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atentan contra derechos de las personas. La de investigar es como la de prevenir, *una obligación de medio* o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca resultados satisfactorio. Sin embargo, *debe emprenderse con seriedad* y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la protección privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectiva-

42 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso CANTORAL BENAVIDES, Reparaciones, supra nota 5, párrafo. 69, entre otras.

mente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues, *si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado*⁴³ (resaltado fuera del texto).

Respecto del deber del Estado frente a las violaciones a los derechos humanos como comportamientos que más dolor generan a las víctimas, la Corte Constitucional ha manifestado: “los derechos de las víctimas adquieren una importancia directamente proporcional a la gravedad del hecho punible. Entre más daño social ocasione un delito, mayor consideración merecen los derechos de quienes fueron víctimas o perjudicados por ese comportamiento. Igualmente, la obligación estatal de investigar los hechos punibles es también directamente proporcional a la manera como el hecho punible pudo afectar bienes jurídicos fundamentales. Entre más grave sea un hecho punible, mayor debe ser el compromiso del Estado por investigarlo y sancionar a los responsables, a fin de lograr la vigencia de un orden justo”.⁴⁴

Obligación del Estado que, por lo demás, debe cumplirse dentro de un plazo razonable. La Corte Interamericana⁴⁵

43 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ, sentencia del 29 de julio de 1988.

44 Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 2003, M. P. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, (Demanda de inconstitucionalidad del artículo 220 numeral 3.º parcial de la Ley 600 de 2000 o código de Procedimiento Penal). En el mismo sentido, resulta importante señalar la sentencias: Sentencia 979 de 2005, M. P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, al consagrar el deber del Estado de investigar con mayor rigor las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ya que dichas violaciones además de generar mayor daño a las víctimas “*entrañan un enorme poder desestabilizador en el seno de una colectividad*”. Así mismo: Sentencia C-370 de 2006 y 575 de 2006 M.P. ALVARO TAFUR GALVIS. Estas últimas respecto de la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 975 de 2005.

45 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso GENIE LACAYO. Sentencia 1997, párr. 77.

precisó este concepto acudiendo a lo señalado por la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos, así: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales son los criterios a tener en cuenta en el desarrollo de este concepto.

Y es que, además, el Estado debe cumplir con este deber porque tiene que garantizarles tanto a las víctimas como a las y los asociados que tales violaciones no volverán a suceder.

El deber de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables implica también la prohibición de dictar leyes de amnistía o indulto ante violaciones de derechos humanos. En el caso *Barrios Altos vs. Perú*⁴⁶, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por violaciones al derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial⁴⁷, estos últimos por haber dictado leyes de amnistía ante vulneraciones de derechos humanos. En el mismo fallo, el Juez A. A. CANÇADO TRINDADE, en voto concurrente, señaló que las leyes de amnistía *“son, en suma, una afrenta inadmisibile al derecho a la verdad y al derecho a la justicia (empezando por el propio acceso a la justicia)”*.

Y es que el incumplimiento en el deber de investigar y sancionar a los responsables genera impunidad, entendida, según la Corte Interamericana, como la *“falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”*⁴⁸. El Estado, al incumplir con este deber, vulnera la garantía

46 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Barrios Altos vs Perú*. Sentencia del 14 de marzo de 2001.

47 Art. 8, 25, 1 y 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

48 Corte IDH. Caso *BÁMACA VELÁSQUEZ vs Guatemala*. Sentencia del 25 de noviembre de 2000, par. 211. Caso *Paniagua Morales y otros vs Guatemala*, sentencia del 25 de mayo de 200196 y otros

que tiene de proporcionar un recurso judicial y efectivo a las víctimas, sometiéndolas a un estado de indefensión y revictimización en tanto desconoce su derecho de acceso a la justicia contemplado no solo desde el punto de vista constitucional sino en los distintos instrumentos internacionales, como se analizó.

De las consideraciones anteriores resulta importante reiterar que el acceso a la justicia tiene su propio contenido y el Estado, la obligación de garantizarlo en todos los derechos que lo componen. Es decir, no solo el acceso a un tribunal lo hace efectivo, pues la participación activa de las víctimas y la obtención de un fallo pronto y ejecutable lo complementan. La obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables frente a graves violaciones de derechos humanos se acentúa y se hace fundamental en la satisfacción de este derecho y en el cumplimiento de la garantía del Estado de acceso a un recurso judicial efectivo.

EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA LEY DE “JUSTICIA Y PAZ”

La Ley 975 de 2005, mediante la cual se dictaron disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley, consagra, formalmente, disposiciones⁴⁹ sobre los derechos de las víctimas (de verdad, justicia y reparación) en el proceso de reinserción que tiene por objeto.

La misma Ley, en su artículo 6° “derecho a la justicia”, señala el derecho que tienen las víctimas de violaciones de derechos humanos de acceder “a recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones”. Y su artículo 37 expresamente cita: “El Estado *garantizará el*

49 Artículos 1.º, 4.º, 7.º, 8.º, 37, 38, 42, 43 de La Ley 975 de 2005.

acceso de las víctimas a la administración de justicia" (resaltado fuera del texto).

Así mismo, consagra esta ley el deber del Estado de "realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos armados al margen de la ley"⁵⁰. La misma otorga competencia en la investigación a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz⁵¹.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen varios obstáculos⁵² que impiden que estas víctimas, en su mayoría rurales, acudan a la administración de justicia para hacer valer sus derechos en esta instancia. Es decir, existen marcadas barreras culturales, sociales y económicas que inciden en el no acceso de las víctimas al sistema judicial. A continuación me referiré a algunas de estas y también a las barreras legales propias de la citada Ley.

El miedo⁵³ es una de las causas más frecuentes que impide que las víctimas en general acudan a instancias judiciales.

50 Artículo 6.º de la Ley 975 de 2005. Y en el artículo 15, "*Esclarecimiento de la verdad*" la Ley señala textualmente: "La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o psicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales.

51 Artículo 16 de la Ley 975 de 2005.

52 A propósito del delito de desplazamiento forzado interno, Cfr. MONCAYO ALBORNOZ (2009).

53 Sobre el miedo al que están expuestas las víctimas de desplazamiento forzado. Corte Constitucional Auto 092 de 14 de abril de 2008 al referirse a la situación de las mujeres en el desplazamiento forzado interno, párr III.1.1.6.ii. En el mismo sentido, Corte Constitucional el Auto n° 251 del 6 de octubre de 2008, a propósito de los derechos fundamentales de niña, niños y adolescentes en situación de desplazamiento.

Homicidios, violencia sexual, tortura, desaparición forzada o el desplazamiento forzado, etc., son algunos de los delitos a los que han sido sometidas las víctimas por parte de los grupos armados. Por la gravedad y la naturaleza de éstos, se genera en las víctimas temor por su seguridad, vida e integridad, al igual que por la de sus seres queridos, razón por la cual en un primer momento buscan ser invisibles ante sus perpetradores, ya que en la mayoría de casos éstos continúan teniendo el control de la zona. Según lo manifestado por ANGELIKA RETTEBERG (2008: 13), “solamente un 12% [de las víctimas] declara que los autores de los delitos no viven en su comunidad” (lo que está en corchetes está por fuera de la cita). Esta situación, además de generar temor en ella, es un indicativo de la continuidad del conflicto armado.

El asesinato⁵⁴, la amenaza y múltiples hechos punibles contra varias y varios líderes e integrantes de organizaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos han generado pánico en otras, alejándolas, naturalmente, del sistema judicial. Es por ello que la no denuncia es consecuente con la invisibilidad que pretenden después de los actos de barbarie padecidos. Situación que contrasta con el deseo de las víctimas respecto de la suerte de los victimarios; así, en el mismo estudio el 37% de las víctimas encuestadas anhelan que los responsables sean encarcelados, e igual porcentaje desea que los mismos les paguen a sus víctimas (RETTEBERG, Op. cit.: 18).

Por otra parte, el desconocimiento de sus derechos y del código propio del sistema judicial, tanto del formal como del oculto, hace que las víctimas de tan graves violaciones desistan de acudir a éste. Al respecto, ALEJANDRO GARRO

54 Entre algunas de las víctimas están los homicidios de: Yolanda Izquierdo (Lideresa de víctimas de desplazamiento en Córdoba), Julio César Molina (líder de víctimas de desplazamiento en el Valle del Cauca), Irma Areiza (líder de víctima de desplazamiento en Antioquia, Henry Acuña Ruíz (líder de víctimas de desplazamiento en Turbaco), etc.

(2002: 295) señala que la ignorancia de los potenciales beneficiarios acerca de sus derechos es el primer obstáculo para el acceso a la justicia.

La generalidad de las víctimas de tan graves violaciones son personas carentes de recursos⁵⁵, con bajo nivel educativo⁵⁶, cabezas de familia⁵⁷ y la mayoría de víctimas niños, niñas y mujeres (MONCAYO ALBORNOZ, 2007: 142) (campesinas, afrodescendientes⁵⁸ e indígenas⁵⁹). Dichas circunstancias hacen que éstas renuncien al sistema de justicia. Apenas natural que presenten confusión en derechos, instituciones, normas y requisitos; así, por ejemplo, la población en situación de desplazamiento confunde el derecho de reparación con la ayuda humanitaria de emergencia que les brinda Acción Social. Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (2008: 54-55), “el 82,8% de los grupos familiares incluidos en el RUP entrevistados no tienen conocimiento del concepto del derecho a la reparación”. También es frecuente que la mayoría de las personas (74%)

55 “En cuanto a ingresos.... 61,5% de las personas reportan menos de \$360.000 mensuales y 16,6% no reportan ningún ingreso” (RETTBERG, Op cit.: 40).

56 “el 44,9% de la muestra declara que el máximo nivel educativo alcanzado es la primaria y 30,5% afirma que no ha completado ningún nivel educativo” (RETTBERG, Op. cit.: 18). Según Profamilia de cada 100 personas 21 no han tenido acercamiento alguno con la educación, 57 han cursado algún nivel de primaria, 20 algún nivel de secundaria y menos del 1% nivel universitario. Cfr. Profamilia Salud sexual y reproductiva en zonas marginales: situación de las mujeres desplazadas, 2000-2001, p.3.

57 “El 54,9% de las mujeres y el 79,3% de los hombres son cabezas de familia” (RETTBERG, Op. cit.: 40). Sobre el particular, La Procuraduría General de la Nación: “el 40% manifiesta de las familias desplazadas tiene a una mujer como jefa de hogar, como consecuencia de la pérdida de sus parejas, ya sea porque son asesinados, reclutados, desaparecidos, detenidos arbitrariamente, o porque se alejan motivados por la situación (Cfr. Procuraduría General de la Nación, 2006: 224 - 225).

58 Las mujeres afrodescendientes en su mayoría presentan un bajo nivel de educación. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Corte Constitucional, Auto 092 de 2008.

59 “La mayoría de las mujeres adultas son analfabetas en castellano”. Informe presentado por la ONIC a la Relatora de la Comisión Interamericana. En Corte Constitucional, Auto 092 de 2008.

no conozca la diferencia entre justicia ordinaria y la Ley de Justicia y Paz (RETTBERG, Op. cit.: 80). “Aunque la mayoría no sabe o no responde, hay una leve preferencia por la Ley de Justicia y Paz en términos de juzgar a los responsables de los crímenes” (Ídem).

Los costos que exigen los procesos penales en su transcurrir son desproporcionados teniendo en cuenta la escasez de recursos a la que se encuentran sometidas estas víctimas. Retomando a LORD MCCLUSKEY, GARRO (2002: 280) sostiene: “Los Tribunales y servicios legales están en teoría disponibles para todos, del mismo modo en que lo está el Hotel Sheraton: cualquiera puede entrar; todo lo que se necesita es dinero”.

Por lo general, y debido al temor de las víctimas, la instauración de la denuncia se efectúa en una ciudad o municipio diferente al sitio donde fueron victimizadas, de ahí que el transporte para las distintas presentaciones ante los funcionarios judiciales demandan dinero, al igual que los honorarios del abogado (en la mayoría de casos⁶⁰), y la recolección de los distintos documentos y en general de las pruebas que debe hacer valer en el proceso.

Ahora bien, en algunos casos y después de un tiempo prudencial las víctimas se empoderan⁶¹ en sus derechos. Hay que señalar que la difusión de la existencia de la Ley de Justicia y Paz ha sido mayor que la de cualquier otra ley del sistema penal, lo cual ha contribuido a que algunas víctimas busquen información y acompañamiento en el proceso ju-

60 Con la salvedad de aquellos abogados que representan judicialmente a las víctimas y que pertenecen a la Defensoría Pública y a organizaciones no gubernamentales.

61 Entrevistas realizadas el 20 de septiembre de 2007 y el 25 de enero de 2008 a dos mujeres víctimas de desplazamiento forzado, homicidio y una de ellas, además acceso carnal contra su hija. Según Rettberg: “La encuesta buscó indagar por la vinculación a organizaciones y el comportamiento político de las personas consultadas. Al respecto, 4,93% afirmó pertenecer a una organización étnica... 22,39% a una organización de víctimas (RETTBERG, Op. cit.: 85).

dicial por parte de organizaciones no gubernamentales⁶² o por Defensores Públicos⁶³, situación que propicia el hecho de que las víctimas denuncien los delitos en este escenario.

En investigación realizada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –CNRR–, Universidad San Buenaventura Medellín, Acción Social (2008), entre otras, se encontró que las mujeres fueron quienes, en un 77%, denunciaron las vulneraciones de derechos humanos ante el procedimiento de la “Ley Justicia y Paz”, y los hombres lo hicieron en un 23%. Muchas de ellas, acuden movidas por la publicidad que los medios, sus redes sociales etc., le han dado a la “Ley de Justicia y Paz”, con la esperanza de obtener una indemnización y castigo para los responsables (RETTBEERG, Op. cit.: 13) en un proceso que se dice garante de sus derechos.

Pero ya en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, las víctimas se encuentran con varios obstáculos que impiden en la práctica que se de un verdadero acceso a la justicia.

62 Las Organizaciones no gubernamentales acompañan algunos casos, dependiendo, entre sus consideraciones de: la población que fue víctima, el cuadro de victimización, si se trata de un caso emblemático que pueda beneficiar a otros o a todo un pueblo.

63 “Es el caso total de víctimas que hacen parte de procesos jurídicos en Medellín, 195, únicamente el 13% de estas víctimas tienen representación judicial pública.

A manera de ilustración del desequilibrio en materia de defensa de los derechos entre las víctimas y los postulados, en el proceso de Ramón María Isaza Arango, miembro de las AUC del Magdalena Medio, intervinieron 40 defensores públicos y 9 defensores de confianza en representación de 17 víctimas. Para el caso de MANCUSO existen 128 víctimas representadas por la Comisión Colombiana de Juristas y tres víctimas representadas por la Corporación Colectivo José Alvear Restrepo. Para el caso de alias “El Pecosó”, solamente hay 4 víctimas representadas por el Colectivo José Alvear Restrepo. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007: 83).

Veamos:

Muchas de las barreras son culturales acentuadas para las mujeres, en su mayoría con escasos conocimientos de lo público. Situación que, aunada a la falta de conocimiento y desinformación suministrada por algunas y algunos funcionarios, junto con su falta de sensibilidad, revictimizan a las víctimas que acudieron al sistema judicial y las desmotivan en su participación. La CNRR (2007: 88) reconoció que uno de los principales problemas que enfrentan las víctimas es el diligenciamiento del formato exigido por la Fiscalía que acredita su calidad, así como la falta de capacitación e información⁶⁴ de las personas que atienden a las víctimas en esta instancia.

Algunas víctimas, después de presentar la denuncia y acreditar su calidad, no poseen información de la Fiscalía sobre el estado del proceso, y es que para ellas es importante saber qué pasará y cuál será su papel en el proceso, muchas no se encuentran en los cascos urbanos de las tres ciudades –Barranquilla, Medellín, Bogotá– en donde se reciben las versiones libres, así que el solo hecho de desplazarse para obtener esta información les genera más costos. Algunas víctimas, una vez asisten a la versión libre, regresan a sus veredas, ciudades o municipios pensando, erróneamente, que terminó su participación en el proceso y que con eso sus pretensiones están aseguradas⁶⁵.

64 “No todo el personal que atendía a las víctimas en las jornadas tenía relación permanente con el formato de Justicia y Paz... Se presentaron casos de formatos mal diligenciados (...) Los criterios para establecer qué víctimas son cobijadas por el marco normativo de la Ley de Justicia y Paz no están totalmente claros entre los/as funcionarios/as” (Comisión Colombiana de Reparación y Reconciliación, Op. cit.).

65 Lo anterior fue manifestado en entrevistas realizadas a abogados y abogadas de organizaciones no gubernamentales en septiembre 15 y 28 de 2007 y enero 18 de 2008.

Otra de las advertencias que se han efectuado respecto de esta Ley es la falta de asesoramiento y acompañamiento a las víctimas. La CNRR (2007: 76 - 77), respecto de la etapa de investigación en la Ley de Justicia y Paz, señaló: “relacionada con la demanda creciente de víctimas que reportan los hechos violentos ocurridos, cercanos a 70.000, que deberán ser atendidas por una organización de 23 fiscales, acompañados para desarrollar técnicamente la investigación por 150 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones”.

Los recursos humanos por parte de la Fiscalía como ente investigador son mínimos ante un escenario de miles de víctimas; aquí vale la pena mencionar que aún no han sido consolidadas en número, pues la Fiscalía (después de más de tres años de vigencia de la “Ley de Justicia y Paz”) carece de un sistema que permita el registro de las mismas sin que se presenten casos de doble registro por los mismos hechos⁶⁶.

Ahora bien, respecto de las versiones de los desmovilizados, es importante manifestar que éstos han manipulado el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos tratando de justificarlas señalando a las víctimas como colaboradores de la guerrilla. Aunque han aceptado en ocasiones ser autores de desplazamiento forzado⁶⁷, no lo han reconocido como una estrategia sistemática y generalizada,

66 Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. Fiscalía General de la Nación, oficio UNJYP n° 006173 del 10 de julio de 2008. “En primer lugar y de manera atenta me permito aclararle que la Unidad Nacional de Justicia y paz no cuenta con un sistema de información, por lo tanto la información que existe obedece a un sistema manual, el cual se está desarrollando por parte de funcionarios de la Unidad de acuerdo a las necesidades de la misma”... aunado a que algunas víctimas aparecen registradas varias veces ante las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales, ya que éstas pudieron haber puesto en conocimiento más de una vez un mismo hecho ante las distintas entidades referidas pretéritamente”.

67 “Las 5 formas reportadas por un mayor porcentaje de personas: el desplazamiento propio (74,3%), un homicidio de un familiar (53,6%), un desplazamiento forzado de un familiar (40,1%), un homicidio de alguien en la comunidad (22,5%) y una desaparición forzada en la familia (20,7%)” (RETTBERG, 2008: 44).

como tampoco han reconocido en este sentido delitos de violencia sexual (CNRR, Op. cit.: 75) contra mujeres, jóvenes y niñas. Han sido contados los casos en los que la Fiscalía ha indagado sobre esta última⁶⁸.

La actuación de la Fiscalía ha sido bastante pasiva en cuanto a la indagación a los desmovilizados de los distintos delitos cometidos, y muchos casos dependen de lo que el victimario desee reconocer⁶⁹. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2007: parr. 23) manifestó que los Fiscales en las versiones libres utilizaron formatos estandar, razón por la cual “la toma de versiones constituyó un trámite meramente formal”. Claro está que no se puede desconocer que la Ley establece un término irrisorio de 60 días (prorrogables en otro tanto) para la investigación de tales delitos. Tampoco se puede desconocer que es precario el número de Fiscales que conforman la Unidad Nacional de Justicia y Paz Delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, 22 fiscales para la investigación de 3.017 paramilitares postulados por el gobierno nacional ante la Fiscalía General de la Nación (Comisión Colombiana de Juristas, Op. cit.: 131).

El deber del Estado de investigar en la Ley de Justicia Paz está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, se ha convertido en una mera corroboración de lo manifestado por el paramilitar en su versión libre; así lo advierte la Fiscalía General de la Nación (2008): la “Unidad de Justicia y Paz no investiga la comisión de los delitos, pues una de sus funciones es corroborar los hechos que son

68 “Pueden tomarse como ejemplo algunas sesiones de versión libre de Éver Veloza, alias “HH.” En ellas, la Fiscalía distingue y hace énfasis en la condición de mujer de una víctima de homicidio de la siguiente manera: “es importante que usted tome nota sobre este hecho teniendo en cuenta que fue una mujer la víctima directa”... (Versión libre de ÉVER VELOZA, alias “HH”, 27 de noviembre de 2007”) (Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, 2008: 64 - 65).

69 Sobre el particular, la declaración de WILSON SALAZAR CARRASCAL, alias *el Loro* (en Comisión Colombiana de Juristas, 2008: 117).

enunciados y/o confesados por los postulados ante la Ley de Justicia y Paz". Como es de esperar ante tal debilidad normativa los paramilitares en sus versiones han evadido en su mayoría responsabilidad sobre estos hechos (Comisión Colombiana de Juristas, 2008a: 58-64).

Pero, además, la desconfianza de las víctimas en el sistema se acrecienta, ya que para julio de 2008 (tres años después de entrada en vigencia la Ley) no se había presentado audiencia de imputación de cargos contra ningún desmovilizado⁷⁰. Sin una imputación pronta, el fallo para las víctimas se hace cada vez más lejano y con él la materialización del derecho de acceso a la justicia. Para contrarrestar tal consecuencia, la Fiscalía ha adoptado la figura de imputaciones parciales para el victimario. Actuación procesal que ha sido aceptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia⁷¹, pero no como práctica generalizada, tal como lo manifestó respecto de la nulidad de la sentencia contra WILSON SALAZAR CARRASCAL alias el *Loro*. Sobre las imputaciones parciales, la Comisión Colombiana de Juristas (2008b) señaló que éstas no acelerarán el fallo porque en algún momento se repre-

70 "Aún no existen aceptaciones o allanamientos, toda vez que hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo audiencia de imputación de los cargos, por lo que hasta el momento no se ha presentado esta figura jurídica. De igual manera sucede con los acuerdos o negociaciones, medidas cautelares e Incidentes de Reparación Integral" (Fiscalía General de la Nación, 2008).

71 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Pena, segunda instancia 30120 M.P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO, 23 de julio de 2008. "Para la Sala Penal de la Corte con ponencia del magistrado José Leonidas Bustos, en los procesos de Justicia y Paz es importante que la Fiscalía tenga la oportunidad de acusar al desmovilizado por los presuntos delitos en diferentes momentos, porque es de esa misma manera como el desmovilizado va confesando sus crímenes" (El Espectador.com. Corte Suprema dice que con los desmovilizados no se habla de verdad, sino de verdades". Disponible en: <http://www.elespectador.com/node/117742>. Febrero 24 de 2009, pár. 1). No obstante, en comunicado de prensa de agosto de 2009, a propósito de la nulidad de la Sentencia contra alias el "Loro", la Corte Suprema de Justicia enfatizó que las imputaciones parciales no deben ser una práctica generalizada (<http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/preocupacion-sentencia-tumbo-condenadoro/127574.aspx>).

sarán las actuaciones en espera del mismo; desnaturalizan el principio de versión libre completa y veraz consagrado en la sentencia C-370 de 2006, y se les daría un tratamiento de delitos comunes y aislados a los delitos sistemáticos y generalizados cometidos por los desmovilizados. Dicho en otras palabras, con esta medida no retornará la confianza de las víctimas en el sistema. Y qué decir respecto de las condenas: después de casi cuatro años de expedida esta ley, se dio la primera respecto de una imputación parcial contra alias el *Loro* en la que se le impuso una pena de 70 meses de cárcel⁷², sentencia que fue declarada nula por la Corte Suprema de Justicia⁷³, entre otras razones, por no incluir dentro de los cargos el concierto para delinquir.

Ahora bien, resulta importante en la obtención de las pretensiones de las víctimas, la participación de las mismas en el proceso de la Ley de Justicia y Paz, pues ésta conlleva a la efectivización de sus derechos, de ahí que formalmente se encuentre consagrada en dicha Ley. Las víctimas que entran a este sistema en su mayoría desean participar en el procedimiento, así; “casi 60% respondió afirmativamente” a la pregunta de si debería participar en los juicios contra los responsables. Las formas preferidas de participación de las víctimas en dichos juicios fueron: “a través de un abogado defensor (26,5%), por medio de la presencia física directa de las víctimas (23,1%), a través de una institución representante (6,4%), a través de medios de comunicación

72 Se dio ésta el 19 de marzo de 2009 (El tiempo. Imponen 70 meses de cárcel para el desmovilizado ‘para’ Loro’, la primera condena de Justicia y Paz. http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/imponen-70-meses-de-carcel-para-el-desmovilizado-para-loro-la-primera-condena-de-justicia-y-paz_4888685-1. Marzo 19 de 2009).

73 Comunicado de prensa de la Corte Suprema de Justicia respecto de la sentencia contra alias el *Loro*, agosto de 2009 (<http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/preocupacion-sentencia-tumbo-condena-loro/127574.aspx>).

(3,9%) y otras formas de participación (1,7%)...” (RETTBERG, Op. cit.: 77).

No obstante, las intenciones de las víctimas que acuden a la Ley de Justicia y Paz, la realidad sobre su participación dentro de la misma es mínima, existen numerosos obstáculos legales y formales en la aplicación de ésta que impiden su participación, algunos subsanados a través de la Corte Constitucional en sentencia 370 de 2006⁷⁴, que señalara –entre otras consideraciones– que la víctima tiene derecho a acceder al expediente y a aportar pruebas en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, el tema no está resuelto; así por ejemplo a la audiencia de versión libre solo pueden asistir las víctimas que demuestren el daño por los delitos que se encuentren relacionados en la base de datos de la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, a las víctimas no les es permitido estar en las salas de audiencias y no pueden contrainterrogar a los victimarios, en algunos eventos le sugieren preguntas al Fiscal, pero en todo caso quedan sujetas a lo que decida éste. La CNRR (Op. cit.: 78) evidenció que “del total de víctimas que han diligenciado el formato, solo el cinco por ciento han asistido a las versiones libres”, y en las condiciones señaladas⁷⁵.

Ahora bien, vale la pena mencionar lo relativo al juicio dentro del procedimiento de la Ley 975 de 2005. Aunque

74 El derecho que tiene la víctima de acceder al archivo del proceso. La Corte Constitucional confirmó que no habrá reserva más allá de lo señalado por la Ley sobre la reserva judicial para proteger la vida y la seguridad de los testigos. La Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 2006, decidió sobre la exequibilidad de algunas expresiones contenidas en los artículos 49 y 58 la Ley 975 de 2005.

75 Sobre el particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2007: parr. 82) señaló que “Este mecanismo indirecto restringe seriamente la posibilidad de utilizar el interrogatorio de la víctima como una vía adecuada de alcanzar la verdad de los hechos. La Fiscalía pierde además una valiosa estrategia para confrontar las versiones libres, y avanzar en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para el acceso a los beneficios”.

existen mecanismos formales para la participación de la víctima en el juicio, en la práctica esta etapa procesal no se presenta (Corporación Sisma Mujer, 2007: 73). Dicho en otras palabras, sin juicio los preceptos de la Ley a favor de las víctimas quedan inoperantes. Irregularidad legal que fue afianzada, lastimosamente, por la Corte Suprema de Justicia el 2 de octubre de 2007⁷⁶, tal como lo señala la Comisión Colombiana de Juristas: la Corte “en una decisión que rompió con la lógica de sus valiosos y sabios pronunciamientos anteriores, determinó que las víctimas no tienen derecho a participar plenamente en los procesos que, conforme a la Ley 975 de 2005, se siguen con los paramilitares. Las víctimas, según la Corte, sólo podrán intervenir después de que concluya la etapa de investigación y de que el paramilitar acepte los cargos que le formule la Fiscalía” (Ídem: 124). Sin embargo, la Corte olvidó que no hay un juicio como tal, que después de la aceptación de cargos continúa la sentencia por los hechos que solo reconoció el paramilitar y que la Fiscalía incluyó en la aceptación de cargos. De esta manera, queda reducida la participación de las víctimas dentro del procedimiento de la Ley de Justicia y Paz, ceñida a las decisiones que tome el fiscal del caso.

La falta de garantías en la protección de las víctimas que se empoderan y hacen valer sus derechos dentro del proceso de justicia y paz se hace manifiesta. Amenazas, homicidios, entre otras conductas punibles en contra de éstas, han sido una constante; así lo ha señalado la Corte Constitucional en varios pronunciamientos: –Auto 200 de 2007, Auto 092 de 2008, Sentencia de Tutela 496 del mismo año–. En esta última, la Corte es explícita al señalar que las accionantes⁷⁷ dentro del proceso de justicia y paz se encuentran en una

76 Corte suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto del 2 de octubre de 2007, expediente 27.484. (Comisión Colombiana de Juristas, 2008: 124).

77 Acción de tutela instaurada por PATRICIA BURITICA CÉSPEDES en nombre propio y en representación de “Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la

situación de especial vulnerabilidad ante un riesgo extraordinario debido al impacto diferencial en razón del género dentro del conflicto armado. Riesgo que atenta contra la seguridad personal, vida, integridad personal y el derecho al acceso a la justicia, por lo que concluyó que: “evaluada la estrategia diseñada por las autoridades demandadas para brindar protección a las víctimas de los procesos judiciales de esclarecimiento de la verdad de justicia y paz, aquella no se acoge satisfactoriamente a los principios que la jurisprudencia y la práctica internacional han establecido para este tipo de programas especiales, *ni incorpora satisfactoriamente los elementos mínimos de racionalidad* de un programa que se inserte en una política pública global de garantía de seguridad, libertad y acceso pleno a la justicia, de las víctimas y testigos de la criminalidad sistemática y /o generalizada⁷⁸.”

Retomando anteriores pronunciamientos y lo manifestado por una parte por la Defensoría del Pueblo sobre la advertencia de, al menos, tres alertas tempranas del riesgo al que están expuestos los y las directivas y los y las integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas; y, por la otra, el homicidio del señor FERNANDO HENRY ACUÑA RUIZ⁷⁹, líder comunal y hermano de una líder del mencionado grupo de desplazados frente a su vivienda en el municipio de Turbaco, ordenó al Ministro del Interior y de Justicia y al Director de Acción Social que envíe⁸⁰ un informe a la Corte Constitucional en el que describa (i) qué acciones concretas tomaron como consecuencia de las órdenes de protección

Paz” (IMP), y otras mujeres víctimas de la violencia, contra el Ministerio del Interior y de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

78 Corte Constitucional, sentencia T- 496 de 2008. M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO.

79 Homicidio efectuado el día 12 de enero de 2009. www.eltiempo.com. Noticia 22 de enero de 2009.

http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/asesinato-de-lider-tiene-atemorizado-a-barrio-de-desplazadas-en-turbaco-bolivar_4763768-1.

80 Al 6 de febrero de 2009.

impartidas por esta Corporación en el Auto 200 de 2007 respecto de la Liga de Mujeres Desplazadas, (ii) qué acciones concretas tomaron como respuesta a cada uno de los informes de riesgo y alertas tempranas emitidos por la Defensoría del Pueblo y citados en el presente auto, (iii) qué razones existen para que, al parecer, un miembro integrante del grupo de desplazados referido no haya estado protegido adecuadamente, (iv) qué razones existen para que, al parecer, no se haya reaccionado idóneamente a los tres informes de riesgo mencionados, (v) quiénes son los funcionarios responsables de esas aparentes negligencias, y (vi) qué medidas tomará para que éstas no se presenten en el futuro⁸¹. Así mismo, ordenó al director de Acción Social realizar las labores de coordinación necesaria para que las autoridades implementen mecanismos de protección para salvaguardar el derecho a la vida, seguridad personal de las líderes e integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas. Al tiempo que le solicitó al Fiscal General de la Nación adelantar la investigación y acusación de los responsables del homicidio de FERNANDO HENRY ACUÑA RUIZ.

Estas son algunas de las barreras culturales, económicas y legales que las víctimas de violaciones de derechos humanos, en su mayoría rurales, deben enfrentar en la búsqueda de su derecho de acceso a la justicia y en el reconocimiento, protección, reparación de sus derechos vulnerados. En la práctica, la situación de las víctimas es desalentadora, sus garantías están restringidas desde antes de entrar al sistema, y la falta de las mismas en la normatividad de la ley de justicia y paz son evidentes.

81 Corte Constitucional, Auto 009 de 2009

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Es importante tener en cuenta que las barreras de acceso a la justicia en el sistema judicial respecto de violaciones de derechos humanos en población rural son de distinto orden (culturales, socioeconómicas, legales, etc.), y se acentúan de manera desproporcionada respecto de indígenas, afrodescendientes y mujeres, mucho más cuando estas últimas pertenecen a los pueblos mencionados. Es por ello que el Estado social de derecho, que se dice pluricultural, en aras de brindar una justicia igualitaria, debe tener en cuenta sus destinatarios y sus diferencias.

La articulación de la teoría, las normas y la práctica se hace necesaria para la efectividad del derecho de acceso a la justicia. Más cuando se trata de víctimas que han sufrido, entre otras violaciones: desplazamiento forzado y con él pérdidas materiales y morales; violencia sexual; pérdida de sus seres queridos como consecuencia de masacres, desaparición forzada, etc. En tanto son personas que fueron en un primer momento victimizadas con tan graves violaciones, es decir que se les desconocieron y vulneraron sus derechos, buscan en el sistema judicial que se los reconozcan, protejan y reparen; y, si el sistema judicial es de difícil acceso, serán doblemente revictimizadas.

Teniendo en cuenta que el desconocimiento de los derechos es uno de los principales obstáculos para hacer efectivo el acceso a la justicia, es imperioso que el Estado capacite a sus funcionarios y funcionarias tanto en el tema jurídico como en el de sensibilización desde una perspectiva diferencial. De lo contrario, los recursos judiciales serán ilusorios.

Así mismo, se requiere de abogados capacitados para lograr un acompañamiento judicial idóneo a lo largo del proceso. La sociedad civil también debe asumir esta función; actualmente, organizaciones no gubernamentales con ahínco han asumido esta labor, sin embargo por la cantidad de

víctimas no son suficiente, y es por ello que la participación activa de colegios de abogados se hace necesaria⁸².

La investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables es una obligación de medio, que debe asumirse con seriedad y rigor. Dicho en otras palabras, no se trata de una simple formalidad. El Estado debe abstenerse de realizar cualquier conducta que impida el cumplimiento de esta obligación y efectuar acciones positivas para lograrlo. De lo contrario, y ante el incumplimiento de éste, tendrá que responder ante instancias internacionales.

Se requiere que el Ministerio del Interior y de Justicia y la Fiscalía General de la Nación acaten lo ordenado por la T- 496 de 2008, los Autos 200 de 2007 y 009 de 2009 en el sentido de desarrollar las acciones necesarias encaminadas a realizar una revisión integral del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz, y así cumpla con los principios y elementos mínimos de racionalidad, de conformidad con los estándares internacionales en aquellos procesos en los que se investigan graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a derechos humanos.

En relación con la investigación en la Ley de Justicia y Paz, se advierten mayores recursos económicos y humanos para obtener un acceso a la justicia material, esto es una, sentencia pronta y ejecutable.

BIBLIOGRAFÍA

ACOSTA, ALVARADO, PAOLA ANDREA (2007). *El derecho de acceso a la justicia en la jurisprudencia interamericana*. Bogotá: Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita.

BIRGIN HAYDÉE Y BEATRIZ KOHEN (2006). *El acceso a la justicia como derecho*. Buenos Aires: Biblos.

82 Sobre el particular, GARRO (2002: 303).

CAPPELETTI, MAURO (s.f.). *Acceso a la Justicia Programa de acción y nuevo método de pensamiento*. 801 p. Disponible en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/48/art/art2.pdf>

CARO CORIA, DINO (s.f.). En *Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal*. México: Biblioteca jurídica virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. www.juridicas.unam.mx.

COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS (2008). *Colombia el espejismo de la justicia y la paz: balance sobre la aplicación de la ley de 975 de 2005*. Bogotá.

—. (2008a). “Aplicación de la Ley de “justicia y Paz” en el crimen de violencia sexual: silencio e impunidad”, en *Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado*. Bogotá.

—. (2008b). *Boletín n° 32: Serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la Ley 975. ¿Imputaciones parciales o derechos parciales?* Disponible en: http://www.coljuristas.org/documentos/documentos_pag/Boletín%2033%20imputaciones_final.pdf

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO (2008). *Primer informe a la Corte Constitucional: Proceso Nacional de verificación de los Derechos de la Población Desplazada*. Bogotá.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2007). *Informe sobre la implementación de la ley de justicia y paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales*. OEA/Ser.L/V/II.129 Doc. 6. 2 octubre 2007.

—. (s.f.) *Derecho al recurso judicial y la administración de justicia en el Ecuador*. Disponible en: <http://www.cidh.org/countryrep/Ecuador-sp/Capitulo%203.htm>

- . (s.f.). *Informe sobre la situación de los derechos humanos de los solicitantes de asilo en el marco del sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado*.
- . (2000). Caso Cabrejos Bernuy, párr. 29. Informe n.º 110 (12-4-2000).
- COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN (2007). *Informe al Congreso: Proceso de reparación a las víctimas balance actual: y perspectivas futuras*.
- . (2008). *Víctimas, violencia y despojo* [CD], Medellín: Universidad San Buenaventura Medellín, Acción Social.
- CORPORACIÓN SISMA MUJER (2007). *Violencia sexual conflicto armado en Colombia*. Bogotá: Toreblanca.
- CUERVO, JORGE IVÁN (2005). "Lineamientos de política pública para el acceso a la justicia de personas de escasos recursos", en *Cuadernos del CIPE*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- FERNÁNDEZ SEGADO, FRANCISCO (1999). "El derecho a la jurisdicción y las garantías del proceso debido en el ordenamiento constitucional español", en *Ius et Praxis*, año 1999 / vol 5 número 001. Revista_praxis@utalca.cl.
- FERRAGIOLI, LUIGI (s.f.). *Derecho y razón: teoría del garantismo penal*. Traducción Perfecto Andrés Ibañez. Madrid: Ed. Trotta. Sexta Ed.
- Fiscalía General de la Nación, Unidad de Justicia y Paz (2008). *Comunicación NUNJYP n.º 006173 de 10 de julio de 2008*. Bogotá.
- GARCÍA RAMÍREZ, SERGIO (s.f.). *El acceso de la víctima a la jurisdicción internacional sobre derechos humanos*. Disponible en: <http://www.uacj.mx/icsa/carreras/EducaciónenDerechosHumanos/II.2.htm>.

- . (2004). “El acceso de la víctima a la jurisdicción internacional de derechos humanos”, en *Codhem*, enero –febrero de 2004. pág 109. Disponible en <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/65/pr/pr31.pdf>.
- . (s.f.). *Panorama del debido proceso (adjetivo) penal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana*. www.juridicas.unam.mx.
- . (1997). *Poder Judicial y Ministerio Público*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa, 2.^a. Ed.
- GARRO, ALEJANDRO M. (2002). *Acceso de los pobres a la justicia en América Latina*. Buenos Aires: Paidós.
- MARABOTTO LUGARO, JORGE (2007). *Un derecho humano esencial: el acceso a la justicia*. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Disponible en www.juridicas.unam.mx septiembre de 2007.
- MESA DE TRABAJO MUJER Y CONFLICTO ARMADO (2008). *viii Informe sobre violencia sociopolítica contra las mujeres, jóvenes y niñas en Colombia*. Bogotá.
- MONCAYO ALBORNOZ, ANA LUCÍA (2007). “Los derechos económicos sociales y culturales en la mujer y el acceso a la justicia”, en *Cátedra UNESCO Derechos Humanos y violencia: gobierno y gobernanza. El desplazamiento forzado un desafío de los derechos humanos*. Bogotá Universidad Externado de Colombia.
- . (2009). “Acceso a la justicia: mujer y desplazamiento forzado”, en *Cátedra UNESCO derechos humanos y violencia: gobierno y gobernanza. Las políticas públicas frente a las violaciones de los derechos humanos*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (2006). *Seguimiento a políticas públicas en materia de movilización y reinserción*, t. II, Bogotá: Sumimpresos.

PROFAMILIA (s.f.). *Salud sexual y reproductiva en zonas marginales: situación de las mujeres desplazadas, 2000-2001*. Bogotá.

RETTBER, ANGELIKA (2008). *Reparación en Colombia. ¿Qué quieren las víctimas?* Bogotá.

VELÁSQUEZ TURBAY, CAMILO (2004). *Derecho Constitucional*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia 3ed.

JURISPRUDENCIA

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. Observación 20 al artículo 7.º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones preliminares, sentencia de junio 26 de 1987.

—. Caso MYRNA MACK CHANG vs. Guatemala, sentencia de 25 de noviembre de 2003.

—. Caso Cinco pensionistas vs. Perú.

—. Caso Colombia vs. JOSÉ ALEXIS FUENTES GUERRERO y otros.

—. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (AGUADO ALFARO y Otros) vs. Perú. Sentencia del 24 de noviembre de 2006.

—. Caso IVCHER BRONSTEIN. Sentencia del 6 de febrero de 2001.

—. Caso CANTORAL BENAVIDES, Reparaciones.

—. Caso GENIE LACAYO. Sentencia 1997.

—. Caso Barrios Altos vs. Perú. Sentencia del 14 de marzo de 2001.

—. Caso BÁMACA VELÁSQUEZ vs. Guatemala. Sentencia del 25 de noviembre de 2000.

- . En Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de Octubre de 1987.
- . Auto 092 de 2008.
- . Auto 009 de 2009.
- . Sentencia SU 1184 de 2001. M. P. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.
- . Sentencia C-228 de 2002. M. P. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.
- . Sentencia C-004 de 2003, M. P. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.
- . Sentencia 979 de 2005. M. P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO.
- . Sentencia 454 de 2005. M. P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO.
- . Sentencia C-370 de 2006. M. P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA y otros.
- . Sentencia 575 de 2006. M. P. ALVARO TAFUR GALVIS.
- . Sentencia 454 de 2006. M. P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO.
- . Sentencia C-209 de 2007. M. P. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA.
- . Sentencia T- 496 de 2008. M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO.

